

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1247

11 de mayo de 2026

Presentado por el señor *Toledo López*

Referido a

LEY

Para crear la “Ley de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, la cual incorpora mecanismos modernos de supervisión telemétrica mediante el Sistema de Rastreo y Monitoreo administrado por la Administración de Servicios Generales y corporaciones públicas; establecer disposiciones actualizadas sobre el uso de vehículos oficiales por funcionarios públicos; definir nuevas excepciones que reflejan la realidad operacional de las agencias de seguridad pública y manejo de emergencias; derogar la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 60-2014, conocida como la “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, fue aprobada en un contexto de estrechez fiscal y con un propósito legítimo de promover la prudencia gubernamental, limitar el uso de vehículos oficiales a fines públicos y evitar que la propiedad del Estado se convirtiera en un beneficio personal para determinados funcionarios. Esa política pública debe conservar plena vigencia. El uso de vehículos oficiales debe responder siempre a una necesidad

pública real, debe estar sujeto a controles efectivos y debe poder ser fiscalizado con rigor por las entidades competentes.

No obstante, más de una década después de su aprobación, la experiencia administrativa, los adelantos tecnológicos y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico han demostrado que el marco vigente requiere una revisión integral. La Ley 60-2014 fue concebida sobre un modelo de control predominantemente formal, centrado en la jornada laboral, la entrega física del vehículo y la documentación manual mediante bitácora. Ese esquema, aunque comprensible en su momento, no atiende adecuadamente las realidades operacionales contemporáneas del Gobierno de Puerto Rico, particularmente en agencias que prestan servicios esenciales, responden a emergencias o requieren disponibilidad continua de funcionarios y personal especializado.

La administración moderna de la flota vehicular gubernamental no puede depender exclusivamente de presunciones rígidas asociadas a la hora o lugar de entrega del vehículo. La Administración de Servicios Generales ha incorporado herramientas tecnológicas de rastreo y monitoreo que permiten fiscalizar, con mayor precisión y transparencia, la ubicación, velocidad, recorrido, tiempo de uso y patrones operacionales de los vehículos oficiales. Esta capacidad tecnológica transforma el análisis. Hoy es posible distinguir con mayor objetividad entre el uso oficial, el uso operacionalmente justificado y el uso indebido para fines personales. Por ello, el marco jurídico debe desplazarse de una lógica meramente formalista hacia un sistema de fiscalización sustantiva, basado en trazabilidad, evidencia verificable, controles tecnológicos, bitácoras confiables, responsabilidad individual y auditoría administrativa.

La revisión legislativa también se justifica por las consecuencias jurídicas producidas por la interacción entre la Ley 60-2014, la Ley 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental y las órdenes administrativas internas de las agencias. En *Oficina de Ética Gubernamental v. Elí Díaz Atienza*, 2025 TSPR 128, el Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó una controversia relacionada con la autorización concedida por el entonces Presidente Ejecutivo de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados para que el Vicepresidente Ejecutivo de dicha corporación pública entregara un vehículo oficial en una instalación de la propia agencia distinta a la sede central. El Tribunal Supremo resolvió que la Oficina de Ética Gubernamental no cumplió con su obligación de probar, mediante prueba clara, robusta y convincente, todos los elementos de la infracción imputada bajo el Artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012.

En particular, el Tribunal Supremo determinó que el Vicepresidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no podía ser catalogado como una “persona privada” para efectos de la Ley de Ética Gubernamental, toda vez que se trataba de un servidor público de alta jerarquía que intervenía en la formulación e implantación de política pública. Asimismo, reconoció que la naturaleza del cargo exigía disponibilidad fuera del horario regular, atención de emergencias y participación en funciones operacionales críticas. Bajo ese marco, el Alto Foro concluyó que la autorización de un punto alternativo de entrega del vehículo, dentro de instalaciones de la propia corporación pública, no constituía automáticamente un beneficio personal indebido ni una infracción ética.

Dicha decisión no debilita la política pública contra el uso indebido de vehículos oficiales. Por el contrario, exige que esa política pública sea formulada con mayor precisión. El ordenamiento debe prohibir y sancionar el uso personal, arbitrario o injustificado de vehículos oficiales, pero no debe confundir ese uso indebido con decisiones administrativas razonables dirigidas a garantizar continuidad operacional, respuesta inmediata, eficiencia institucional o cumplimiento de funciones públicas. Una ley moderna debe establecer criterios claros para esa distinción, de manera que las agencias puedan operar con flexibilidad cuando el interés público lo requiera, sin crear espacios de impunidad ni beneficios personales disfrazados de necesidad oficial.

La necesidad de claridad legislativa se acentúa ante el impacto institucional que ha tenido la referida jurisprudencia. Según ha trascendido públicamente, luego de la decisión del Tribunal Supremo en *OEG v. Díaz Atienza*, *supra*, la Oficina de Ética Gubernamental cerró múltiples casos en los que se imputaban beneficios indebidos a “personas privadas”. Ese resultado evidencia una tensión normativa más amplia entre la

legislación sobre vehículos oficiales, la legislación ética y la administración cotidiana de recursos públicos. Cuando un estatuto genera interpretaciones incompatibles, litigios prolongados, incertidumbre sobre su alcance y consecuencias no previstas sobre la capacidad fiscalizadora del Estado, corresponde a la Asamblea Legislativa intervenir para precisar la norma.

Asimismo, la experiencia práctica ha demostrado que la Ley 60-2014 no contempla adecuadamente las necesidades de las agencias que prestan servicios críticos a la ciudadanía. El Departamento de Seguridad Pública, sus negociados, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, los organismos de respuesta, coordinación, seguridad, salud, infraestructura crítica y continuidad gubernamental requieren un régimen que reconozca la realidad operacional de funcionarios y empleados que pueden ser activados en cualquier momento. En tales escenarios, la disponibilidad inmediata de un vehículo oficial no constituye un privilegio personal, sino una herramienta indispensable para ejecutar una función pública urgente.

Particular atención merecen los funcionarios y empleados que, por la naturaleza de sus responsabilidades, deben responder a emergencias, coordinar recursos interagenciales, movilizarse a zonas afectadas, atender situaciones que amenazan la vida o seguridad de la ciudadanía, o mantener la continuidad de servicios esenciales. Directores de zona, coordinadores de búsqueda y rescate, personal de manejo de emergencias, funcionarios de respuesta operacional y otros servidores públicos con deberes análogos no pueden quedar sujetos a un esquema legal que trate toda disponibilidad vehicular fuera de horario regular como si fuera presumiblemente irregular. La ley debe permitir excepciones controladas, documentadas y fiscalizables, sujetas a criterios objetivos y a la supervisión de la autoridad competente.

Del mismo modo, la activación del Centro de Operaciones de Emergencia, la emisión de una declaración de emergencia por parte del Gobernador mediante orden ejecutiva, o cualquier activación oficial de respuesta interagencial, crea circunstancias extraordinarias que justifican ampliar temporalmente el acceso y uso de vehículos oficiales para las agencias concernidas. En esos contextos, la rigidez normativa puede

convertirse en un obstáculo para la respuesta gubernamental. La ley debe proveer un mecanismo claro para activar excepciones temporales, definir su alcance, documentar su necesidad, limitar su duración y garantizar que todo uso permanezca vinculado a la emergencia o función pública que lo justifica.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario derogar y sustituir la Ley 60-2014 por un nuevo marco legal que mantenga intactos los principios de austeridad, transparencia, responsabilidad fiscal y uso exclusivo de la propiedad pública para fines públicos, pero que a la vez incorpore herramientas modernas de monitoreo, reconozca la diversidad operacional de las agencias, clarifique las excepciones aplicables, armonice la normativa con la Ley de Ética Gubernamental y evite interpretaciones que penalicen decisiones administrativas razonables adoptadas en beneficio del servicio público.

Esta Ley no autoriza el uso personal de vehículos oficiales ni reduce la responsabilidad de los servidores públicos sobre la propiedad del Estado. Al contrario, fortalece la fiscalización al exigir controles tecnológicos, documentación verificable, criterios uniformes, autorización expresa, supervisión administrativa y consecuencias claras por incumplimiento. Su propósito es reemplazar un modelo rígido e insuficiente por un régimen moderno, transparente y operacionalmente funcional, capaz de proteger los recursos públicos sin obstaculizar la prestación eficiente, continua y urgente de los servicios gubernamentales.

1 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

2 Artículo 1.- Título.

3 Esta Ley se conocerá como la “Ley de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto
4 Rico”.

5 Artículo 2.- Definiciones.

6 Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que
7 a continuación se indica:

1 (a) Bitácora. — Registro oficial, en formato físico o electrónico, utilizado para documentar
2 y controlar el uso, recorrido, millaje, conductor y propósito oficial de los vehículos del
3 Gobierno de Puerto Rico. La bitácora deberá incluir, como mínimo, la fecha, hora de
4 salida y llegada, punto de origen y destino, millaje inicial y final, nombre del
5 conductor, propósito oficial del viaje, agencia o unidad responsable, y cualquier
6 incidencia relevante.

7 (b) COE. — Significa el Centro de Operaciones de Emergencia del Negociado para el
8 Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), incluyendo sus
9 activaciones parciales, regionales, interagenciales o generales, según sean ordenadas
10 por la autoridad competente.

11 (c) Declaración de Emergencia. — Significa la orden ejecutiva emitida por el Gobernador
12 o la Gobernadora de Puerto Rico que declare una situación de emergencia o desastre
13 en todo o parte del territorio de Puerto Rico.

14 (d) Funcionario Público. — Significa aquellas personas que ocupan cargos o empleos en
15 el Gobierno de Puerto Rico que intervienen en la formulación e implantación de la
16 política pública. También incluirá, para fines de esta Ley, a todo servidor público que,
17 por razón de su cargo, funciones, disponibilidad operacional o deberes oficiales, esté
18 autorizado a utilizar, custodiar, supervisar, asignar o administrar vehículos oficiales.

19 (e) Jefe de Agencia. — Significa la persona que ejerce la máxima autoridad administrativa
20 de un departamento, dependencia, instrumentalidad o corporación pública del Poder
21 Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico.

(f) Jornada Laboral. — Significa el periodo destinado a rendir labores en una agencia, que puede extenderse a más de ocho (8) horas diarias, incluyendo los fines de semana, días feriados, turnos extendidos, periodos de disponibilidad operacional, activaciones de emergencia, labores fuera del lugar regular de trabajo y cualquier otro periodo durante el cual el funcionario público, servidor público o persona autorizada esté realizando funciones oficiales o se encuentre sujeto a activación inmediata por razón de su cargo.

(g) Sistema de Rastreo y Monitoreo. — Significa el sistema de Localización Automática de Vehículos (*Automatic Vehicle Location*) administrado por la Administración de Servicios Generales, por las corporaciones públicas o por cualquier agencia autorizada mediante sus propios sistemas o proveedores y las corporaciones públicas con sus propios proveedores, mediante el cual se monitorea en tiempo real la ubicación, recorridos, velocidad y uso de la flota vehicular del Gobierno de Puerto Rico.

(h) Vehículo Oficial. — Significa el vehículo de motor asignado a los jefes de agencia o funcionarios públicos, ya sea aquellos bajo la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales, como aquellos adquiridos por otro departamento, dependencia, instrumentalidad o corporación pública, mediante compraventa, arrendamiento, arrendamiento financiero (*leasing*), o cualquier otro negocio jurídico con fondos públicos, incluyendo vehículos asignados, cedidos, transferidos, arrendados, custodiados u operados por una agencia para el cumplimiento de funciones oficiales.

Artículo 3.- Prohibición General.

Ningún Jefe de Agencia o Funcionario Público podrá utilizar, custodiar, retener, operar o disponer de un vehículo oficial para fines personales, privados, familiares, recreativos, comerciales, partidistas, electorales o para cualquier otro propósito ajeno al servicio público, independientemente de que el vehículo se haya adquirido mediante compraventa, arrendamiento, arrendamiento financiero, donación, transferencia, cesión, asignación interagencial o cualquier otro negocio jurídico realizado total o parcialmente con fondos públicos por cualquier departamento, dependencia, instrumentalidad, o corporación pública, de la Rama Ejecutiva de Gobierno de Puerto Rico, incluyendo aquellas que se encuentran en Estados Unidos.

Todo vehículo oficial deberá utilizarse exclusivamente para fines oficiales, conforme a la naturaleza del cargo, las funciones asignadas, la necesidad operacional de la agencia, las autorizaciones aplicables, la reglamentación vigente y las disposiciones de esta Ley. La utilización de un vehículo oficial fuera del horario regular de trabajo, durante fines de semana, días feriados, fuera de la sede principal de la agencia o en una instalación distinta al lugar regular de trabajo no constituirá, por sí sola, una infracción a esta Ley cuando responda a una función oficial, disponibilidad operacional, activación de emergencia, continuidad de servicios, autorización expresa de la agencia o custodia en una instalación designada conforme a esta Ley.

Salvo que medie autorización legal, reglamentaria, administrativa u operacional conforme a esta Ley, todo vehículo oficial deberá ser devuelto, al concluir su uso oficial o jornada laboral aplicable, a la agencia, instalación designada, centro operacional, sede regional, cuartel, estación, almacén, base o lugar autorizado para su custodia. La

1 autorización para conservar, trasladar o custodiar un vehículo oficial fuera del lugar
2 regular de trabajo deberá estar fundamentada en criterios de necesidad pública, costo-
3 eficiencia, seguridad, continuidad operacional, disponibilidad inmediata o prestación de
4 servicios esenciales y deberá documentarse mediante la bitácora correspondiente o el
5 Sistema de Rastreo y Monitoreo.

6 El uso de todo vehículo oficial estará sujeto al monitoreo del Sistema de Rastreo y
7 Monitoreo de la Administración de Servicios Generales y de las corporaciones públicas
8 o agencias que cuenten con sistemas propios o proveedores autorizados, el cual
9 constituirá una herramienta de supervisión, auditoría, fiscalización e investigación que
10 podrá ser utilizada como evidencia en procedimientos administrativos y judiciales sobre
11 el uso de vehículos oficiales luego de una certificación oficial de Administración de
12 Servicios Generales o el proveedor autorizado en caso de las corporaciones públicas o
13 agencias concernidas.

14 Para tales fines, la Administración de Servicios Generales, la corporación pública
15 concernida, la agencia correspondiente o el proveedor autorizado podrá emitir
16 certificaciones oficiales sobre la unidad vehicular, tablilla, fecha, hora, ubicación,
17 recorrido, velocidad, millaje, usuario asignado, integridad del registro y demás
18 información pertinente. Nada de lo dispuesto en este Artículo limitará la facultad del foro
19 administrativo o judicial para determinar la admisibilidad, peso probatorio o suficiencia
20 de dicha evidencia conforme al derecho aplicable.

21 Para efectos de esta Ley, no se presumirá uso indebido únicamente por razón de
22 que un vehículo oficial se encuentre fuera de la sede principal de la agencia, fuera del

1 horario regular de trabajo o en una instalación distinta al lugar ordinario de empleo,
2 siempre que exista una justificación oficial documentada, autorización válida,
3 disponibilidad operacional, activación de emergencia o relación razonable con el
4 cumplimiento de funciones públicas. No obstante, el uso personal, no autorizado, falso,
5 simulado o injustificado de un vehículo oficial constituirá una infracción independiente
6 por cada día, evento o recorrido en que subsista la violación.

7 Artículo 4.- Sistema de Monitoreo y Bitácora Vehicular.

8 La Administración de Servicios Generales será la entidad responsable de
9 administrar y mantener el Sistema de Rastreo y Monitoreo para la flota vehicular del
10 Gobierno de Puerto Rico. También las corporaciones públicas con sus proveedores. Todo
11 vehículo oficial deberá contar con un dispositivo de Rastreo y Monitoreo operacional,
12 excepto los descritos en el Artículo 6. Dicho dispositivo deberá permanecer activo,
13 funcional y debidamente asociado a la unidad vehicular correspondiente durante todo
14 periodo de uso, custodia, desplazamiento, asignación o disponibilidad operacional del
15 vehículo oficial. Ningún funcionario público, jefe de agencia, servidor público, empleado,
16 contratista, conductor designado o persona autorizada podrá remover, apagar, alterar,
17 manipular, bloquear, desconectar, inutilizar o interferir con el funcionamiento del
18 dispositivo de rastreo y monitoreo, salvo por razón técnica, mantenimiento autorizado,
19 sustitución del equipo, orden de autoridad o excepción expresamente reconocida por esta
20 Ley o su reglamentación.

21 Asimismo, todo Funcionario Público o Jefe de Agencia que tenga asignado un
22 vehículo oficial deberá mantener una bitácora vehicular en la que consigne: (1) la hora de

1 salida y llegada; (2) el millaje del vehículo oficial al momento de la salida y al momento
2 de su llegada; (3) un resumen de los viajes realizados en el día; y (4) cualquier otra
3 incidencia pertinente sobre el recogido, uso y entrega del vehículo. La obligación de
4 mantener bitácora aplicará igualmente a toda persona autorizada que conduzca,
5 custodie, utilice o tenga bajo su control un vehículo oficial, independientemente de que
6 el vehículo esté asignado permanentemente, temporalmente, por turno, por misión, por
7 emergencia o por necesidad operacional.

8 La bitácora podrá mantenerse en formato físico, electrónico o mediante cualquier
9 plataforma digital aprobada por la Administración de Servicios Generales, la agencia
10 concernida o la corporación pública correspondiente.

11 Cuando el vehículo oficial esté integrado al Sistema de Rastreo y Monitoreo, la
12 información generada por dicho sistema podrá complementar, validar o sustituir
13 parcialmente la bitácora vehicular, conforme disponga la reglamentación aplicable. No
14 obstante, la existencia del Sistema de Rastreo y Monitoreo no eximirá automáticamente a
15 la persona autorizada de documentar el propósito oficial del uso, la autorización
16 correspondiente, las incidencias relevantes o cualquier información que el sistema
17 tecnológico no capture adecuadamente.

18 Los registros del Sistema de Rastreo y Monitoreo serán conservados por la
19 Administración de Servicios Generales, de igual manera las corporaciones públicas y
20 estarán disponibles para la inspección de la Oficina de Ética Gubernamental, el Contralor
21 de Puerto Rico, o cualquier autoridad que los requiera en el ejercicio de sus funciones
22 fiscalizadoras. Dichos registros deberán conservarse por un término no menor de cinco

(5) años, salvo que exista una investigación, auditoría, procedimiento administrativo, procedimiento judicial, reclamación, querella, referido o controversia pendiente relacionada con el uso del vehículo oficial, en cuyo caso deberán conservarse hasta que el asunto advenga final y firme.

La Administración de Servicios Generales adoptará, mediante reglamento, carta circular, orden administrativa o guía uniforme, los parámetros mínimos de operación, mantenimiento, integración, retención, acceso, certificación, auditoría y seguridad del Sistema de Rastreo y Monitoreo.

La información generada por el Sistema de Rastreo y Monitoreo y por la bitácora vehicular será utilizada exclusivamente para fines oficiales de administración, supervisión, mantenimiento, seguridad, auditoría, fiscalización, investigación, cumplimiento legal y protección de la propiedad pública. El acceso a dicha información deberá limitarse al personal autorizado y a las autoridades competentes, sin perjuicio de las normas aplicables sobre confidencialidad, seguridad pública, investigaciones en curso, datos sensibles, infraestructura crítica y documentos públicos.

El incumplimiento con la obligación de mantener el dispositivo de rastreo operacional, completar la bitácora, conservar los registros, producir la información requerida o permitir la fiscalización correspondiente constituirá una infracción a esta Ley, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad administrativa, ética, civil o penal que proceda conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Artículo 5.- Normas de Uso de Vehículos Oficiales.

(a) Al concluir la jornada laboral, todo funcionario o empleado público entregará el vehículo oficial a la agencia correspondiente, salvo que exista autorización institucional escrita que disponga lo contrario. Dicha entrega podrá realizarse en la sede principal, instalación designada, centro operacional, sede regional, cuartel, estación, almacén, base o cualquier otro lugar autorizado por la agencia para la custodia del vehículo oficial.

(b) La autorización institucional escrita deberá identificar, como mínimo, el vehículo oficial, la persona autorizada, el fundamento operacional de la autorización, el lugar autorizado para la entrega o custodia, la duración de la autorización y la unidad administrativa responsable de supervisar su cumplimiento. En casos de emergencia, activación operacional, respuesta inmediata o circunstancias extraordinarias que impidan obtener autorización previa por escrito, la autorización podrá documentarse posteriormente dentro de un término razonable, que no excederá de cuarenta y ocho (48) horas, salvo justa causa debidamente documentada.

(c) Se prohíbe el uso de vehículos oficiales para asuntos personales, dentro o fuera de la jornada regular de trabajo.

(d) Para efectos de esta Ley, no constituirá uso personal:

1. El traslado entre instalaciones oficiales de la misma agencia o corporación pública o entre instalaciones de distintas agencias, cuando el traslado esté relacionado con funciones oficiales, coordinación interagencial, reuniones, inspecciones, supervisión, respuesta operacional o continuidad de servicios.

2. El transporte requerido por la naturaleza del puesto cuando el funcionario tenga disponibilidad permanente o funciones ejecutivas continuas, disponibilidad operacional, deberes de respuesta inmediata, responsabilidades de supervisión regional, atención de emergencias, manejo de infraestructura crítica o funciones que razonablemente requieran movilidad fuera del horario regular de trabajo.
3. El uso autorizado por el jefe de agencia mediante determinación escrita fundamentada o por el funcionario delegado conforme a reglamento, orden administrativa, carta circular o norma interna aplicable, siempre que la autorización responda a una necesidad pública, operacional, fiscalizable y documentada.
4. El traslado relacionado a inspecciones, supervisión operacional, coordinación interagencial o gestión administrativa oficial, incluyendo visitas de campo, reuniones oficiales, actividades de respuesta, manejo de incidentes, continuidad de operaciones, auditorías, entrega de documentos o equipo, apoyo logístico, protección de instalaciones públicas o cualquier gestión directamente vinculada al servicio público.
5. El traslado hacia o desde una instalación designada, sede regional, centro operacional, cuartel, estación, almacén, base o lugar autorizado para la entrega, custodia, despacho o disponibilidad del vehículo oficial.
6. La custodia temporal de un vehículo oficial fuera de la sede principal cuando esté autorizada por razón de disponibilidad operacional, emergencia,

seguridad del vehículo, costo-eficiencia, continuidad de servicios, distancia razonable al área de operación o necesidad de respuesta inmediata.

7. El desplazamiento incidental razonablemente necesario para alimentos, descanso, relevo, abastecimiento de combustible, mantenimiento, reparación, lavado, inspección mecánica, estacionamiento seguro o cualquier gestión accesoria indispensable para completar una misión oficial o preservar el vehículo oficial.

(e) Se considerará uso personal únicamente cuando:

1. El vehículo se utilice para actividades privadas ajenas a funciones oficiales;
2. No exista relación razonable con funciones institucionales;
3. No exista autorización válida, necesidad operacional, activación de emergencia, disponibilidad funcional o justificación oficial documentada;
4. El vehículo se utilice para beneficiar directa o indirectamente a una persona, negocio, entidad privada, actividad partidista, campaña política, evento social o gestión particular ajena al servicio público;
5. El funcionario, empleado o persona autorizada falsee, omita, altere o simule información en la bitácora, en el Sistema de Rastreo y Monitoreo o en cualquier certificación, informe, autorización o documento relacionado con el uso del vehículo oficial;
6. El recorrido, destino, horario, pasajero, parada o patrón de uso no guarde relación razonable con el propósito oficial invocado y no exista explicación documentada que lo justifique; o

1 7. La persona autorizada utilice el vehículo oficial en exceso del alcance,
2 duración, ruta, propósito o condiciones establecidas en la autorización
3 correspondiente.

4 (f) La mera apariencia, inferencia o presunción no será suficiente para establecer una
5 violación a esta Ley en ausencia de prueba concreta. La determinación de uso personal
6 o indebido deberá estar sustentada en evidencia, incluyendo, según aplique,
7 bitácoras, registros del Sistema de Rastreo y Monitoreo, certificaciones oficiales,
8 testimonios, documentos, autorizaciones, informes de auditoría, patrones de uso o
9 cualquier otra prueba admisible conforme al derecho aplicable. Nada de lo dispuesto
10 en este inciso impedirá que una autoridad competente investigue posibles
11 irregularidades cuando existan indicios razonables de uso indebido. Sin embargo,
12 ninguna sanción podrá basarse exclusivamente en apariencia de impropiedad o en el
13 mero hecho de que el vehículo oficial se encuentre fuera de la sede principal, fuera
14 del horario regular de trabajo o en una instalación distinta al lugar ordinario de
15 empleo.

16 (g) Toda agencia deberá mantener bitácoras de uso que incluyan:

- 17 1. Hora de salida y llegada;
18 2. Millaje inicial y final;
19 3. Resumen del propósito oficial del viaje;
20 4. Firma del funcionario responsable.

21 Artículo 6.- Excepciones.

22 Los siguientes funcionarios públicos estarán excluidos de la aplicación de esta Ley:

- 1 a. Gobernador (a) de Puerto Rico.
- 2 b. Secretario (a) de Estado.
- 3 c. Secretario (a) de Justicia.
- 4 d. Secretario (a) del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
- 5 e. Secretario (a) del Departamento de Seguridad Pública.
- 6 f. Comisionado (a) del Negociado de Bomberos de Puerto Rico.
- 7 g. Comisionados auxiliares, comandantes de zona, jefes de distrito y el director de
- 8 transportación del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
- 9 h. Comisionado (a) del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas.
- 10 i. Director de Operaciones, Director de Administración (en funciones de Sub-
- 11 Comisionado), supervisores de zona, supervisores de apoyo operacional,
- 12 unidades de respuesta rápida (asignadas por el Comisionado), y Director (a) de
- 13 Transportación del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto
- 14 Rico.
- 15 j. Comisionado(a) del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de
- 16 Desastres.
- 17 k. Los directores de zona y los coordinadores de búsqueda y rescate del Negociado
- 18 para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.
- 19 l. Comisionado (a) del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1.
- 20 m. Comisionado (a) del Negociado de Investigaciones Especiales.
- 21 n. Agentes encubiertos del Negociado de Investigaciones Especiales.
- 22 o. Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

- 1 p. Agentes encubiertos, comandantes de zona, de área y comandantes auxiliares,
2 directores de las divisiones de homicidios, inteligencia criminal y de drogas,
3 directores de los cuerpos de investigaciones criminales, comandantes de distrito,
4 superintendente auxiliar de operaciones de campo y su auxiliar y los directores de
5 las divisiones de violencia doméstica de la Policía de Puerto Rico.
- 6 q. Comisionado (a) del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos
7 Naturales y Ambientales, comandantes regionales, supervisores operacionales,
8 oficiales de respuesta e investigación ambiental.
- 9 r. Jefe (a) de Fiscales y aquellos fiscales o funcionarios del Departamento de Justicia
10 que, por razón de investigaciones criminales, comparecencias judiciales urgentes,
11 coordinación interagencial, seguridad personal o disponibilidad operacional, sean
12 designados mediante certificación escrita fundamentada por el Secretario de
13 Justicia.
- 14 s. Ayudante General de la Guardia Nacional de los Estados Unidos.
- 15 t. Cualquier otro funcionario, empleado o personal especializado que sea designado
16 mediante reglamento, orden administrativa, carta circular o certificación escrita
17 fundamentada de la agencia concernida, previa autorización de la Administración
18 de Servicios Generales, cuando la naturaleza del cargo requiera disponibilidad
19 operacional continua, respuesta inmediata, protección de vida o propiedad,
20 seguridad pública, manejo de infraestructura crítica, continuidad gubernamental
21 o prestación de servicios esenciales. Dicha designación deberá identificar el cargo,

la unidad administrativa, la justificación operacional, el alcance de la autorización, la duración de la excepción y los controles de monitoreo y fiscalización aplicables.

Artículo 7.- Excepción por Activación del Centro de Operaciones de Emergencia o Declaración de Emergencia.

Cuando el Gobernador (a) emita una Declaración de Emergencia mediante orden ejecutiva, o cuando el Director (a) del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres active formalmente el COE, los Secretarios y Jefes de Agencia podrán, mediante reglamento o autorización escrita, permitir el uso de vehículos oficiales fuera de la jornada regular de trabajo al personal de sus respectivas agencias que tenga la responsabilidad de responder operacionalmente bajo dicha activación del COE.

La autorización dispuesta en este Artículo deberá responder a una necesidad pública concreta relacionada con la protección de la vida, la salud, la seguridad, la propiedad, la infraestructura crítica, la continuidad gubernamental, la prestación de servicios esenciales, la coordinación interagencial o la respuesta operacional ante la emergencia.

Dicha autorización:

- 1) Será de carácter temporal y durará únicamente durante el período de activación del COE o la vigencia de la Declaración de Emergencia, según corresponda, salvo que la autoridad competente determine por escrito que subsiste una necesidad operacional relacionada con la fase de respuesta, recuperación, estabilización, continuidad de servicios o cierre operacional de la emergencia.

- 1 2) Deberá especificar los funcionarios o empleados autorizados, el vehículo o
2 vehículos asignados, y las funciones que justifican la excepción, incluyendo, como
3 mínimo, la agencia o unidad responsable, el fundamento operacional, el área
4 geográfica o funcional de respuesta, la duración estimada de la autorización, el
5 supervisor responsable y las condiciones de uso, custodia y entrega del vehículo
6 oficial.
- 7 3) Se notificará a la Administración de Servicios Generales dentro de cinco (5) días
8 laborables de emitida o, cuando la urgencia de la emergencia no lo permita, dentro
9 de cinco (5) días laborables posteriores a que las condiciones operacionales
10 permitan razonablemente dicha notificación. En el caso de corporaciones públicas
11 o agencias con flotas administradas mediante sistemas o proveedores propios, la
12 notificación se realizará también a la unidad interna responsable de la flota
13 vehicular.
- 14 4) El uso de los vehículos autorizados bajo esta excepción seguirá siendo
15 monitoreado por el Sistema de Rastreo y Monitoreo y quedará sujeto a las
16 disposiciones de bitácora de esta Ley, salvo aquellas limitaciones estrictamente
17 necesarias por razones de seguridad pública, investigaciones confidenciales,
18 operaciones encubiertas, protección de infraestructura crítica, fallas tecnológicas,
19 interrupción de comunicaciones o circunstancias extraordinarias propias de la
20 emergencia, las cuales deberán documentarse tan pronto sea razonablemente
21 posible.

- 1 5) En ningún caso la excepción autorizará el uso del vehículo oficial para asuntos
2 personales ajenos a la emergencia declarada, a la activación del COE, a la misión
3 asignada o a la necesidad operacional que justificó la autorización.
- 4 6) Toda autorización emitida bajo este Artículo deberá ser revisada periódicamente
5 por la agencia concernida mientras subsista la emergencia o activación, a los fines
6 de confirmar que la necesidad operacional continúa vigente y que el uso del
7 vehículo oficial permanece relacionado con funciones públicas.
- 8 7) Una vez cese la activación del COE, expire la Declaración de Emergencia o
9 concluya la necesidad operacional que justificó la excepción, la agencia deberá
10 cancelar la autorización, requerir la devolución del vehículo oficial a la instalación
11 correspondiente y conservar la documentación justificativa, incluyendo bitácoras,
12 registros del Sistema de Rastreo y Monitoreo, certificaciones, memorandos,
13 autorizaciones y cualquier otro documento pertinente.

14 Artículo 8.- Sanciones

15 Cualquier Jefe de Agencia o Funcionario Público que incumpla con las disposiciones
16 de esta Ley estará sujeto a sanciones según los reglamentos institucionales de las
17 agencias, corporaciones públicas y Administración de Servicios Generales. Nada de lo
18 dispuesto en este artículo limitará las facultades de la Oficina de Ética Gubernamental, el
19 Contralor de Puerto Rico u otras entidades fiscalizadoras de investigar, sancionar o
20 señalar las conductas que constituyan violaciones a sus respectivas leyes habilitadoras.

21 Constituirán infracciones a esta Ley, entre otras, las siguientes conductas:

1 (a) Utilizar un vehículo oficial para fines personales, privados, familiares,
2 recreativos, comerciales, partidistas, electorales o ajenos al servicio público;

3 (b) Retener, custodiar, trasladar o utilizar un vehículo oficial fuera de los términos
4 autorizados por esta Ley, su reglamentación, la agencia concernida o la autorización
5 aplicable;

6 (c) Falsear, omitir, alterar o simular información en la bitácora vehicular,
7 autorización, informe, certificación, registro electrónico o cualquier otro documento
8 relacionado con el uso del vehículo oficial;

9 (d) Remover, apagar, alterar, manipular, bloquear, desconectar, inutilizar o
10 interferir con el Sistema de Rastreo y Monitoreo, salvo por razón técnica, mantenimiento
11 autorizado, sustitución del equipo, orden de autoridad competente o excepción
12 expresamente reconocida por esta Ley o su reglamentación;

13 (e) Negarse injustificadamente a producir bitácoras, registros, certificaciones,
14 informes o datos del Sistema de Rastreo y Monitoreo requeridos por una autoridad
15 competente;

16 (f) Autorizar el uso, custodia, retención o asignación de un vehículo oficial sin
17 fundamento oficial, necesidad operacional, autorización válida o documentación
18 suficiente;

19 (g) Permitir, tolerar o encubrir el uso personal o indebido de un vehículo oficial
20 por parte de otra persona; y

21 (h) Incumplir con la devolución, custodia, documentación, conservación de
22 récords, notificación, monitoreo o fiscalización requerida por esta Ley.

1 La multa administrativa por violación a esta Ley no será menor de mil dólares
2 (\$1,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000) por cada infracción, y será satisfecha por
3 la persona infractora de su propio peculio cuando se determine que incurrió en uso
4 personal, falso, simulado, no autorizado o injustificado de un vehículo oficial. Para
5 efectos de este Artículo, cada día, evento, autorización irregular, recorrido indebido,
6 falsificación, omisión material o acto de interferencia con el Sistema de Rastreo y
7 Monitoreo podrá constituir una infracción independiente.

8 La imposición de sanciones bajo este Artículo deberá considerar la naturaleza de
9 la infracción, la intencionalidad de la conducta, la existencia de autorización o
10 justificación oficial, el monto de fondos públicos involucrado, la frecuencia o patrón de
11 uso indebido, la cooperación de la persona investigada, el daño ocasionado a la
12 propiedad pública, la interferencia con los mecanismos de fiscalización y cualquier
13 circunstancia agravante o atenuante pertinente.

14 Artículo 9.- Reglamentación.

15 Se conceden sesenta (60) días naturales al Administrador de Servicios Generales
16 para atemperar o promulgar la reglamentación, orden administrativa, carta circular o
17 boletín informativo que estime pertinente, a fin de asegurar el fiel cumplimiento de las
18 disposiciones de esta Ley, incluyendo las normas para el funcionamiento e integración
19 del Sistema de Rastreo y Monitoreo en todas las agencias del Poder Ejecutivo, una vez
20 entre en vigor.

21 Dentro de dicho término, la Administración de Servicios Generales deberá
22 establecer, como mínimo, normas uniformes sobre:

1 (a) La instalación, operación, mantenimiento, sustitución y certificación de los
2 dispositivos del Sistema de Rastreo y Monitoreo;

3 (b) La integración de datos entre la Administración de Servicios Generales, las
4 agencias y las corporaciones públicas que administren flotas vehiculares mediante
5 sistemas o proveedores propios;

6 (c) El contenido mínimo, formato, conservación y uso de las bitácoras vehiculares
7 físicas o electrónicas;

8 (d) Los términos de conservación de registros, informes, certificaciones, bitácoras
9 y datos generados por el Sistema de Rastreo y Monitoreo;

10 (e) Los criterios para autorizar el uso, custodia, retención o entrega de vehículos
11 oficiales fuera de la sede principal, fuera del horario regular de trabajo o en instalaciones
12 designadas;

13 (f) Los procedimientos de auditoría, inspección, certificación, acceso y producción
14 de información a las autoridades fiscalizadoras competentes;

15 (g) Las medidas de seguridad, confidencialidad, integridad, trazabilidad y control
16 de acceso a la información generada por el Sistema de Rastreo y Monitoreo;

17 (h) Las excepciones operacionales necesarias por razón de seguridad pública,
18 investigaciones encubiertas, protección de infraestructura crítica, emergencias, fallas
19 tecnológicas o continuidad de servicios esenciales; y

20 (i) El procedimiento administrativo aplicable para atender incumplimientos,
21 imponer medidas correctivas y referir posibles violaciones a las autoridades competentes.

1 Las corporaciones públicas y agencias que administren flotas vehiculares
2 mediante sistemas, reglamentos, órdenes administrativas o proveedores propios deberán
3 atemperar sus normas internas a las disposiciones de esta Ley y a los parámetros mínimos
4 establecidos por la Administración de Servicios Generales, salvo que una ley especial, la
5 naturaleza de sus funciones, la seguridad pública, la protección de infraestructura crítica,
6 las investigaciones confidenciales o la continuidad operacional requieran normas más
7 específicas o controles adicionales.

8 Hasta tanto se apruebe o atempere la reglamentación correspondiente,
9 continuarán vigentes las normas, órdenes administrativas, cartas circulares, reglamentos
10 internos y procedimientos existentes sobre vehículos oficiales, en todo aquello que no sea
11 incompatible con esta Ley.

12 Artículo 10.- Cláusula de Supremacía.

13 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley
14 que no esté en armonía con lo aquí establecido.

15 Artículo 11.- Separabilidad.

16 Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuere
17 declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada
18 no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia
19 quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo o parte que así hubiere sido
20 declarado inconstitucional.

21 Artículo 12.- Derogación.

1 Se deroga la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de
2 Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”.

3 Artículo 13.- Vigencia.

4 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

5